



1c3P mk1V yMGc 8WQN Nr7N zm0U pZA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



5. Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Bogotá, 10 de abril de 2026

Honorables

LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

Senado de la República

JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO

Cámara de Representantes

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Carrera 7 No. 8-68. Edificio Nuevo del Congreso

Bogotá D.C.

Respetados Congresistas,

De manera atenta, en atención a la expedición del Decreto Legislativo 241 de 2026 y el Decreto 366 de 2026, se remite el Informe de que trata la Ley 137 de 1994 "Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia" y el artículo 84 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Compilado mediante Decreto 111 de 1996), en los siguientes términos:

El Gobierno nacional, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales conferidos por la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás normas aplicables, expidió el Decreto Legislativo 241 de 2026, en cuya parte considerativa se encuentran las razones por las cuales era necesario tomar las medidas presupuestales que permitieran conjurar las causas de la perturbación que fundamentaron la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó e impedir la extensión de sus efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se encuentran los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos que fueron tenidos en cuenta para la elaboración y expedición del Decreto 241 de 2026.

I. FUNDAMENTOS FACTICOS

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un término de 30 días calendario. El alcance territorial de la medida cubre ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El objetivo de la declaratoria es conjurar los graves efectos derivados de múltiples eventos hidrometeorológicos anómalos y extremos, asociados a un frente frío atípico que generó lluvias y crecientes súbitas que superaron los registros históricos (1991-2020). Estos eventos causaron afectaciones en 69.235 familias (252.233 personas), daños en 19.798 hectáreas productivas, destrucción de infraestructura vial, educativa y hospitalaria, y el desbordamiento de embalses hidroeléctricos estratégicos como Urrá I y Playas.

La declaratoria se ampara en el Artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al señor Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, a declarar el Estado de Emergencia ante hechos sobrevinientes que perturben de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico. Y la Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los Estados de Excepción), que regula los requisitos formales y materiales para el ejercicio de las facultades presidenciales, permitiendo la expedición de decretos con fuerza de ley orientados exclusivamente a conjurar la crisis, incluyendo la facultad transitoria de crear o modificar tributos (Artículo 47).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

En el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia dispone que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, el presidente de la República podrá, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año.

La declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

De acuerdo con el principio de legalidad del presupuesto, que se desprende de los artículos 345 y 346 constitucionales, los ingresos y los gastos no sólo deben ser decretados previamente, sino que, además, deben estar apropiados en el presupuesto para ser ejecutados.

La Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, y los Tratados Internacionales que reconocen Derechos Humanos y prohíben su limitación en los Estados de Excepción, consagran los requisitos formales y materiales que estos deben observar, y en particular el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Con la finalidad de solventar las necesidades de gasto adicionales requeridas para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica, era necesario que una vez determinada la fuente adicional de recursos, se modificara el Presupuesto General de la Nación para apropiar los recursos correspondientes.

Así mismo, el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que la ejecución de los recursos que son aprobados mediante la Ley Anual de Presupuesto queda en cabeza de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, en virtud de la autonomía presupuestal establecida en el artículo 110 del referido Estatuto, el cual señala:

"ARTICULO 110. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes".

Como se observa, las personas jurídicas de derecho público tienen la capacidad de comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de sus apropiaciones, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Sobre la ejecución del presupuesto y la ordenación del gasto, la Corte Constitucional ha manifestado en sentencia C-101 de 1996:

"El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado -limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto (...)".

De esta manera, el ordenamiento jurídico contempla la facultad en cabeza del Gobierno nacional para hacer modificaciones al Presupuesto General de la Nación mediante decretos legislativos en Estados de Excepción, siguiendo en todo caso las disposiciones establecidas en la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

RECURSOS ADICIONALES

Para financiar la adición presupuestal definida en el Decreto 241 de 2026 en un marco de sostenibilidad fiscal, se adoptaron medidas tributarias de carácter extraordinario mediante los Decretos 173 y 240 de 2026.

Los aludidos decretos establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a financiar la adición presupuestal de \$8,68 billones incorporada mediante el Decreto 241 de 2026. Estas disposiciones crean fuentes transitorias de ingreso con destinación específica para la atención de la emergencia y la recuperación de las zonas afectadas.

El Decreto 173 de 2026, complementado por el Decreto 240 de 2026, creó un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas. El hecho generador corresponde a la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, determinado en fechas específicas según el tipo de contribuyente. La base gravable se calcula como el patrimonio bruto menos deudas, con exclusiones definidas para activos no representativos de riqueza disponible. Se establecen tarifas diferenciales: 0,5% para la generalidad de las sociedades y 1,6% para sectores financiero y extractivo. El impuesto es de causación instantánea y contempla plazos de declaración y pago en dos cuotas durante abril, mayo y junio de 2026. El recaudo proyectado asciende a \$8,3 billones, con destinación exclusiva a la financiación de la emergencia.

El Decreto 240 de 2026 introdujo un gravamen sobre los juegos de suerte y azar operados por internet. El hecho generador son los depósitos realizados por los usuarios para participar en las apuestas. La base gravable corresponde a los ingresos brutos del juego (GGR), definidos como la diferencia entre el valor apostado y los premios pagados. La tarifa se fija en 16% como impuesto nacional al consumo o en 19% bajo el esquema del IVA, según la disposición aplicable. Este impuesto amplía la base tributaria sobre un sector previamente no gravado en las mismas condiciones que los juegos presenciales.

El mismo Decreto 240 de 2026 estableció el impuesto complementario de normalización tributaria. Este mecanismo grava la posesión de activos omitidos o la inclusión de pasivos inexistentes al 1° de abril de 2026. La tarifa es del 19% sobre el costo fiscal o el autoevalúo comercial de los activos. La declaración debe presentarse hasta el 31 de julio de 2026. El pago del impuesto permite regularizar la situación fiscal del contribuyente, evitando la determinación de rentas por activos omitidos en periodos anteriores y extinguiendo acciones penales asociadas.

Es conveniente precisar que los recursos derivados del Decreto 177 no están financiando los gastos que se adicionaron en el Decreto 241 de 2026. Este decreto crea una contribución destinada a financiar gastos extraordinarios del sector eléctrico que demanda la atención de la emergencia. La medida consiste en un incremento del 2% sobre las ventas brutas de energía por generación propia, aplicable durante seis meses a empresas generadoras ubicadas en cuencas afectadas. Los recursos derivados de esta contribución



1c3P mk1V yMGc 8WQN Nr7N zm0U pZA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



tienen destinación específica a acciones de restauración ecológica, regulación hídrica y gestión del riesgo, incluyendo instrumentos de ordenamiento de cuencas y rehabilitación de ecosistemas. La ejecución de estos recursos se hará a través de los presupuestos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), toda vez que estos recursos no serán adicionados al PGN 2026.

En su conjunto, las medidas antes anotadas configuran un esquema de financiación extraordinaria basado en la ampliación de la base gravable, la captación de rentas de sectores específicos y la implementación de una contribución transitoria. Su diseño permite generar ingresos adicionales en el corto plazo para respaldar la ejecución del gasto público requerido en la atención de la emergencia.

La tabla 1 presenta las fuentes de financiación determinadas para financiar la emergencia en su conjunto, es decir la adición del PGN 2026 realizada mediante el Decreto 241 de 2026 y liquidada mediante el Decreto 366 de 2026 y los gastos destinados a la protección ambiental que serán ejecutados por las CAR y el seguimiento del uso de estos recursos, en línea con la atención de la emergencia, se hará por parte de la UNGR. Esto, de acuerdo con lo establecido en los decretos con fuerza de ley expedidos en el marco de la declaratoria de emergencia (Decreto Legislativo 150 de 2026).

Tabla 1. Fuentes de Financiación Emergencia Económica¹

Medida Tributaria	Decreto	Descripción y Alcance
Impuesto al Patrimonio (Personas Jurídicas)	0173 y 0240	Aplicable a personas jurídicas, sociedades de hecho y establecimientos permanentes con patrimonio líquido \geq 200.000 UVT al 1 de marzo (31 de marzo para sucursales) de 2026. Tarifa general del 0.50% y diferencial del 1.6% para sectores financiero y extractivo.
Impuesto Nacional al Consumo (Juegos Online)	240	Tarifa del 16% sobre los depósitos de dinero realizados por usuarios apostadores en plataformas de juegos de suerte y azar por internet.
Impuesto de Normalización Tributaria	240	Tarifa del 19% aplicable a activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026.
Transferencia del Sector Eléctrico	177	Sobretasa transitoria (por 6 meses) del 2% sobre las ventas brutas de energía por generación propia de hidroeléctricas y térmicas ubicadas en las cuencas afectadas.
Alivios Tributarios (Recuperación de Cartera)	240	Reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para obligaciones en mora ante la DIAN, condicionado al pago total del capital antes del 30 de abril de 2026.

Fuente: Decretos 173, 177 y 240 de 2026

¹ Incluye adición presupuestal hecha mediante el Decreto 241 de 2026 y los gastos destinados a la protección ambiental que serán ejecutados por las CAR, que no forman parte de dicha adición.

Sustento técnico de la estimación de ingresos extraordinarios

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la competencia legal de proyectar el recaudo esperado de los ingresos tributarios extraordinarios destinados a financiar el gasto de la emergencia.

En términos generales, la estimación de este recaudo se fundamenta en metodologías que integran análisis de base gravable, capacidad contributiva, comportamiento sectorial y mecanismos de movilización de liquidez.

El principal componente del recaudo corresponde al impuesto al patrimonio. La metodología de proyección utiliza información de declaraciones de renta administrada por la DIAN, con la cual se construyen agregados de patrimonio líquido y se segmenta la población contribuyente por percentiles. Este análisis identifica que el 0,2% de las personas jurídicas concentra el 54,6% del patrimonio líquido total, lo que permite focalizar el tributo en contribuyentes con mayor capacidad contributiva.

El hecho generador se define sobre patrimonios líquidos iguales o superiores a 200.000 Unidades de Valor Tributario al 1 de marzo de 2026. La estimación incorpora el análisis de la Tarifa Efectiva de Tributación como variable de referencia. Las empresas ubicadas en el percentil superior registran una tarifa efectiva de 21,3%, inferior al promedio de 28,0% del total, lo que sustenta la incorporación de un gravamen adicional.

Un segundo componente corresponde al impuesto al consumo sobre juegos de suerte y azar operados por internet. El sustento empírico de la estimación se apoya en la experiencia de 2025, cuando se aplicó el IVA del 19% sobre los depósitos de juegos en línea. Durante ese periodo, los depósitos registraron un crecimiento nominal superior al 27%, alcanzando \$8.442 mil millones, mientras que el ingreso bruto del juego (GGR) ascendió a \$2.954 mil millones. Este comportamiento permite inferir que la demanda del servicio no presenta variaciones significativas ante cambios en la carga tributaria.

La estimación del recaudo parte de una línea base construida a partir de un impuesto previamente aplicado sobre los depósitos del sector. Posteriormente, se ajusta la base gravable al sustituir los depósitos por los ingresos brutos del juego (GGR). A continuación, se aplica la tarifa correspondiente al nuevo tributo. El cálculo incorpora un factor de crecimiento del sector basado en tendencias observadas y, finalmente, incluye un ajuste por la eliminación de impuestos descontables, lo que permite estimar el recaudo efectivo bajo el nuevo esquema tributario.

Este componente incorpora variables macroeconómicas relacionadas con la inflación y el consumo. El servicio no forma parte de la canasta del Índice de Precios al Consumidor, lo que implica ausencia de transmisión directa a la inflación. El modelo también incorpora supuestos de elasticidad precio de la demanda, clasificando el servicio como inelástico, lo que permite proyectar estabilidad en el recaudo.

El esquema de financiación se complementa con el impuesto de normalización tributaria y los mecanismos de recuperación de cartera. El impuesto de normalización aplica una tarifa del 19% sobre activos omitidos y pasivos inexistentes al 1 de abril de 2026. La base gravable se determina a partir del costo fiscal o del autoevaluó comercial con soporte técnico. La estimación del recaudo incorpora el supuesto de ampliación de la base gravable mediante la regularización de activos no declarados.

De forma simultánea, se implementa un mecanismo de reducción de sanciones e intereses para obligaciones en mora. La tasa de interés moratoria se reduce al 4,5% anual condicionada al pago total de la obligación principal y una proporción de las sanciones.

Como se mencionó antes, el Decreto 177 de 2026 establece una contribución del 2% sobre las ventas brutas de energía por generación propia, con un periodo de aplicación de seis meses, la cual no financia la adición presupuestal prevista en el Decreto 241 de 2026. La estimación del recaudo de esta contribución utiliza información de caudales registrados en febrero de 2026, incluyendo niveles de 2.086 metros cúbicos por segundo en el embalse de Urrá, lo que permite aproximar la actividad del sector y su capacidad de generación de ingresos.

Medidas adicionales de Regulación administrativa y sectorial

Además de las medidas presupuestales antes citadas, se adoptaron medidas de regulación administrativa y sectorial orientadas a remover barreras jurídicas, agilizar la acción estatal y garantizar una respuesta estatal inmediata en sectores críticos. Estas disposiciones, junto con las medidas presupuestales, buscan conjurar la crisis, proteger a la población afectada y evitar la prolongación de sus efectos mediante ajustes excepcionales en normas de contratación, gestión del territorio, regulación ambiental, servicios públicos y alivios financieros.

En materia de contratación pública, los decretos habilitan la contratación directa bajo reglas de derecho privado y eliminan el límite legal del 50% para la adición de contratos. Esta flexibilización permite acelerar la adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para la atención de la emergencia.

En la misma línea, se suspendieron las restricciones de la Ley de Garantías electorales (Ley 996 de 2005) para los actos y contratos relacionados con la atención de la emergencia,



1c3P mk1V yMGc 8WQN Nr7N zm0U pZA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



evitando que las limitaciones administrativas propias de periodos preelectorales impidan agilizar la respuesta humanitaria y la reubicación de damnificados.

En materia de tierras y propiedad, se adoptaron mecanismos extraordinarios para asegurar la disponibilidad inmediata de suelo seguro. Entre ellos, el saneamiento automático de títulos, el registro preferente en un día hábil y la posibilidad de segregar folios en zonas de restitución. Estas medidas eliminan obstáculos como litigios o gravámenes que podrían retrasar la reubicación de comunidades afectadas. Además, se fortalecen las facultades de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), permitiéndoles actuar con mayor celeridad en la adquisición, adecuación y entrega de predios, así como en la reorganización de unidades productivas.

En el ámbito ambiental y de recursos hídricos, las disposiciones se centran en reducir tiempos y mejorar la gestión del riesgo. Se establece un procedimiento abreviado para trámites de licencias y permisos relacionados con agua potable y saneamiento básico. Con ello, se busca garantizar el acceso rápido al agua y facilitar la reconstrucción de infraestructura esencial.

Paralelamente, se ordena la adopción urgente de instrumentos de ordenación del territorio a través de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) y la delimitación de rondas hídricas mediante criterios geomorfológicos provisionales. Esta última medida permite definir zonas de exclusión y manejo inmediato para recuperar la capacidad natural de regulación de los ríos y prevenir nuevas inundaciones.

En el sector eléctrico, las medidas regulatorias tienen un doble enfoque: técnico y financiero. Desde el punto de vista técnico, se exige a los embalses ajustar sus “volúmenes de espera” considerando eventos extremos con periodos de retorno de hasta 500 años. Esta disposición busca elevar los márgenes de seguridad en la operación de represas y fortalece la capacidad de amortiguación frente a crecientes súbitas, protegiendo a las poblaciones aguas abajo. En el componente financiero, se establece una transferencia transitoria adicional sobre las ventas de energía, destinada a financiar acciones de recuperación ambiental y estabilización hidrológica en las cuencas afectadas.

En relación con la producción agropecuaria se adoptaron medidas dirigidas a evitar una crisis secundaria. Se suspendieron los cobros judiciales durante seis meses y se ajustaron las condiciones de inversión obligatoria en instrumentos como los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), con el fin de mantener el flujo de crédito hacia el campo. Asimismo, se creó el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA), que contempla la condonación de capital e intereses para pequeños productores, y se habilitaron mecanismos de compra de cartera. Estas decisiones se complementan con la autorización a entidades como Finagro y el Banco Agrario para destinar utilidades a fondos de garantía y riesgo.



1c3P mk1V yMGc 8WQn Nr7N zm0U pZA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minihacienda.gov.co>



En el sector educación se adoptaron medidas que apuntan a garantizar la continuidad de programas sociales esenciales. Se autorizó la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para consumo en casa en los territorios afectados, incluso en escenarios de suspensión de clases presenciales, asegurando la nutrición de niños y adolescentes durante la emergencia.

En síntesis, el paquete de medidas de regulación sectorial busca reducir trámites, eliminar restricciones administrativas temporales, fortalecer capacidades institucionales y establecer criterios técnicos más exigentes en la gestión del riesgo y el apoyo a la población afectada. Esto, con el propósito de atender la emergencia inmediata, así como de sentar bases para una recuperación social y productiva más rápida alineada con la mitigación de futuros eventos extremos.

La tabla 2 sintetiza las principales medidas de regulación antes mencionadas.

Tabla 2. Principales Medidas de Regulación

Tipo de Medida	Decreto	Resumen de la Medida	Justificación, Objetivo o Metas
Administrativa	0174 (Art. 19), 0175 (Art. 12)	Habilitación de la contratación directa bajo normas de derecho privado y eliminación del límite legal del 50% para la adición de contratos.	Los procesos ordinarios son estructuralmente incompatibles con la inmediatez requerida para salvar vidas y adquirir bienes y servicios urgentes.
Administrativa	0174 (Art. 19), 0175 (Art. 12)	Excepción total de la Ley 996 de 2005 para todos los contratos y actos administrativos relacionados con la atención de la crisis.	Evitar que las restricciones de contratación en época preelectoral actúen como un obstáculo para la respuesta humanitaria y la reubicación de víctimas.
Regulación Sector Eléctrico	0177 (Art. 2)	Exigencia de ajustar el "volumen de espera" en embalses usando como referencia técnica eventos extremos de retorno de 500 años.	Reforzar la seguridad de las presas y aumentar la capacidad de amortiguación de crecientes para proteger a las poblaciones ubicadas aguas abajo.
Registro y titulación de propiedad de tierras	0174 (Art. 4, 6, 17)	Implementación del saneamiento automático de títulos y registro de actos de adquisición en un plazo máximo de 1 día hábil.	Remover barreras jurídicas (litigios o gravámenes) que impidan la disponibilidad inmediata de suelo seguro para reasentar a los damnificados.
Regulación financiera sector Agropecuario	0175 (Art. 9, 11)	Suspensión de cobros judiciales por 6 meses y ajuste en el porcentaje de inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).	Prevenir la descapitalización sistémica del campo, aliviar la carga financiera de los productores y asegurar el flujo de crédito para la siembra.
Regulación financiera sector Agropecuario	0175 (Art. 4)	Implementación del Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA): abono de hasta el 95% del capital para deudas con Banco Agrario de pequeños productores al día al 31 de dic. de 2025.	Mitigar la descapitalización sistémica de los productores rurales, proteger su mínimo vital y restablecer la capacidad productiva necesaria para la seguridad alimentaria.
Trámites Ambientales	0177 (Art. 9)	Adopción de un procedimiento abreviado que reduce a la tercera parte los términos para permisos de agua y saneamiento básico.	Garantizar el derecho fundamental al agua potable de forma expedita, reduciendo la duración de trámites administrativos que retrasan obras.
Regulación ambiental hidrológica	0177 (Art. 4)	Adopción de una ronda hídrica estimada basada en criterios geomorfológicos mientras se surte el acotamiento definitivo.	Definir áreas de exclusión y manejo urgente para recuperar la capacidad de regulación hídrica natural de los ríos y evitar nuevas inundaciones.

Fuente: Decretos de Emergencia

III. NECESIDADES DE GASTO

La adición presupuestal definida en el Decreto 241 de 2026 busca atender efectos concretos de la emergencia, con una relación directa entre el tipo de gasto y las afectaciones identificadas, en un contexto en el cual las asignaciones programadas en la Ley 2559 de 2025, que decretó el PGN, no contemplan recursos para estos propósitos, toda vez que la emergencia responde a un hecho sobreviniente.

Al respecto es preciso subrayar que la UNGRD y las entidades del PGN certificaron las necesidades de recursos que están incorporados en la adición presupuestal contemplada en el Decreto 241 de 2026, liquidada mediante el Decreto 366 del mismo año.

1. Sector de Presidencia

En el Sector Presidencia, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se adicionan \$1,18 billones para coordinar la recuperación temprana y las acciones de rehabilitación. Estos recursos se destinan a centralizar la gestión del riesgo y articular las intervenciones derivadas del desastre, asegurando coherencia en la respuesta institucional en los territorios afectados.

2. Sector Agricultura y Desarrollo Rural

En el Sector Agricultura y Desarrollo Rural se adicionan \$1,70 billones orientados a mitigar la afectación sobre los sistemas productivos rurales. La financiación de acceso a tierras, alivio de deudas y garantías crediticias responde a la pérdida de activos productivos ocasionada por inundaciones, lo que afecta la seguridad alimentaria y los ingresos de pequeños productores.

3. Sector Educación

En el Sector Educación, la adición suma \$1,0 billón para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada. De manera complementaria, en la Unidad de Alimentación Escolar (UAPA) se adicionan \$220.933 millones para garantizar la continuidad del soporte nutricional mediante modalidades transitorias. Estas medidas responden a la interrupción del servicio educativo y a la necesidad de mantener condiciones mínimas de bienestar para la población estudiantil.

4. Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

En el Sector Vivienda, Ciudad y Territorio se adicionan \$1,32 billones de pesos para soluciones habitacionales y gestión del hábitat, y \$878.587 millones para agua potable y

saneamiento básico. La destrucción de viviendas y la afectación de infraestructura de servicios públicos esenciales, exige intervenciones para restablecer condiciones de habitabilidad.

5. Sector Transporte

En el Sector Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) se adicionan \$626.220 millones para intervenir infraestructura vial crítica. Esta asignación se vincula con la pérdida de conectividad causada por daños en vías y puentes, lo que limita la movilidad, la logística de ayuda humanitaria y la actividad económica.

6. Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

En el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible la adición asciende a \$187.933 millones para acciones de regulación hídrica, ordenamiento de cuencas y recuperación de ecosistemas. Estas acciones responden a la necesidad de gestionar los efectos ambientales del evento y reducir riesgos asociados a dinámicas hidrológicas alteradas.

7. Sector Salud y Protección Social

En el Sector Salud y Protección Social se asignan \$455.271 millones para fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria. Estos recursos atienden el incremento de la demanda en servicios de salud derivado de condiciones como contaminación del agua, hacinamiento y exposición a riesgos epidemiológicos.

8. Sector Minas y Energía

En el Sector Minas y Energía se adicionan \$110.000 millones para garantizar la continuidad del suministro de energía y gas. La conexidad radica en la afectación de infraestructura energética y en la necesidad de evitar interrupciones en servicios esenciales para la población.

9. Sector Inclusión Social

En el Sector Inclusión Social, a través del DPS, se adicionan \$408.560 millones para implementar transferencias monetarias, apoyos alimentarios y medidas de inclusión productiva. Esta asignación responde a la pérdida de ingresos de los hogares, a la necesidad de proteger el consumo básico durante la emergencia y a facilitar procesos iniciales de reactivación económica en los territorios afectados.

En desarrollo del Decreto 245 de 2026, estos recursos financian tres líneas de intervención:
i) transferencias monetarias extraordinarias no condicionadas dirigidas a hogares



1c3P mk1V yMGc 8WQN Nr7N zm0U pZA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



damnificados, con el fin de garantizar el mínimo vital; ii) apoyos excepcionales en alimentación y acceso a agua segura, mediante la flexibilización operativa del programa Hambre Cero; y iii) medidas de recuperación de medios de vida, que incluyen la entrega de insumos, capital semilla y acompañamiento técnico para restablecer unidades productivas de la economía popular afectadas por el evento climático.

Para garantizar la oportunidad en la atención, el decreto establece criterios extraordinarios de focalización, permitiendo la inclusión de beneficiarios a partir de censos de emergencia, sin requerir registros previos en el Sisbén, y define reglas de compatibilidad con otros programas sociales para evitar duplicidades y asegurar complementariedad.

El Decreto Legislativo 245 de 2026 también establece la inembargabilidad de las transferencias, garantizando que los recursos sean entregados a los beneficiarios, sin descuentos ni intermediaciones financieras.

10. Sector Igualdad y Equidad

En el Sector Igualdad y Equidad, el ICBF se adicionan \$280.000 millones para la protección de la niñez y la adolescencia, en aras de mitigar los riesgos de vulneración de derechos derivados del desplazamiento, la pérdida de entornos protectores y la desestructuración familiar.

11. Sector Defensa

En el Sector Defensa se adicionan \$279.894 millones para financiar el despliegue de capacidades de búsqueda, rescate y atención de desastres. Su conexidad con la emergencia se fundamenta en la necesidad de respuesta operativa inmediata ante eventos que superan la capacidad institucional ordinaria.

12. Sector Interior

El Sector Interior, a través de la Dirección Nacional de Bomberos, se adicionan \$30.800 millones para atender el incremento de emergencias hidrometeorológicas. Estos recursos permiten fortalecer capacidades en rescate, manejo de aguas y atención de incidentes asociados.

Los recursos de la adición presupuestal del PGN serán coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ejecutados a través de diferentes sectores, tal como se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3. Adición PGN 2026 por Sector (Decreto 241 de 2026)

Cifras en Pesos

Sector / Entidad	Valor Adicionado (Pesos)	Objeto del Gasto
Presidencia (UNGRD)	\$ 1.179.008.077.575	Atención de la etapa de recuperación temprana, acciones de rehabilitación y coordinación de la gestión del riesgo.
Agricultura y Desarrollo Rural	\$ 1.699.327.846.668	Acceso a tierras (Decreto 0174), Alivio de la Deuda Agropecuaria (PADA), capitalización del FAG y recuperación de sistemas agroalimentarios.
Educación (Ministerio)	\$ 1.004.115.417.949	Reconstrucción de 657 sedes educativas y 15 Instituciones de Educación Superior, aulas temporales y dotación escolar.
Alimentación Escolar (UAPA)	\$ 220.933.268.496	Garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en casa ante la suspensión del calendario académico.
Transporte (Invías)	\$ 626.220.000.000	Atención de vías por pérdida de banca y taludes, y reconstrucción de puentes en las zonas afectadas.
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 187.933.000.049	Modelación hidrosedimentológica, Centro de Monitoreo del Sinú, restauración de áreas protegidas y regulación hídrica (POMCAs).
Vivienda (Fonvivienda)	\$ 1.321.413.000.000	Planes de gestión del hábitat, soluciones habitacionales para reasentamientos y reparación de viviendas.
Minas y Energía	\$ 110.000.000.000	Acciones de atención inmediata para garantizar la estabilidad y prestación del servicio energético.
Agua Potable y Saneamiento Básico	\$ 878.587.000.000	Atención de afectaciones en infraestructura de agua y saneamiento a través del Fondo Potencia Mundial de la Vida.
Defensa (Fuerza Pública y Defensa Civil)	\$ 279.894.000.000	Fortalecimiento de capacidades de búsqueda, rescate y atención de desastres en los territorios afectados.
Salud y Protección Social	\$ 455.271.769.629	Atención de la demanda por condiciones sanitarias de la crisis y recuperación de infraestructura hospitalaria.
Interior (Bomberos)	\$ 30.800.000.000	Contención de emergencias hidrometeorológicas, búsqueda y rescate urbano (USAR) y potabilización de aguas.
Inclusión Social (Prosperidad Social)	\$ 408.560.135.746	Atención masiva a hogares damnificados mediante programas como "Hambre Cero", "Renta Ciudadana" e inclusión productiva.
Igualdad y Equidad (ICBF)	\$ 280.000.000.000	Identificación y protección de niños y familias ante riesgos de desplazamiento y pérdida de cuidado parental.
TOTAL ADICIÓN	\$ 8.682.063.516.112	Financiamiento integral para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Fuente: Decreto 241 de 2026.

En suma, el Gobierno nacional hizo un estudio conjunto con la participación de las entidades del Presupuesto General de la Nación con el fin de adicionar los recursos que permitan conjurar la declaratoria Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Choco e impedir la extensión de sus efectos.



1c3P mk1V yMGc 8WQN Nr7N zm0U pZA=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



En ese sentido, la proyección de recursos que se esperan recaudar, en aplicación de los Decretos 173 y 240 de 2026, es coherente con la adición de recursos realizada mediante el Decreto 241 de 2026, este último liquidado por el Decreto 366 de 2026 en cuyo anexo se presenta el detalle de los ingresos y gastos incorporados en el presupuesto de la actual vigencia.

Cordialmente,

HERNANDEZ
EZ
ARANGO
MARTHA

Firmado digitalmente por
HERNANDEZ
ARANGO
MARTHA

MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO

Directora General del Presupuesto Público Nacional

ELABORÓ:

Edgar Antonio Guio

Asesor Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Carolina Baquero Cárdenas

Asesora Grupo de Asuntos Jurídicos DGPPN

REVISÓ:

Luz Helena Rodríguez González

Subdirectora de Competitividad y Desarrollo Sostenible

Mauricio Humberto Iregui Garcia

Subdirector de Gobierno, Seguridad y Justicia

María Mercedes Riaño Bolaños

Subdirectora de Promoción y Protección Social

Eddy Shirley Herreño Mosquera

Subdirectora de Análisis y Consolidación Presupuestal

Jaime Romero Mayor

Coordinador Grupo de Asuntos Jurídicos DGPPN

APROBÓ:

Martha Hernandez Arango

Directora General del Presupuesto Público Nacional